

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

En los autos N°335-23012, Rol del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, por sentencia de primera instancia, dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria señor Mario Carroza Espinosa, a fojas 1819 y siguientes, el 11 de septiembre de 2017, se condenó a Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes, a sufrir cada uno de ellos, la pena de cinco años y un día presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, como autores del delito de secuestro calificado de María Galindo Ramírez, ocurrido a contar del día 22 de julio de 1976.

Se dispuso el cumplimiento efectivo de las penas, las que deberán ser satisfechas a continuación de las que actualmente se encuentran cumpliendo.

Además, el sentenciador de primer grado acogió la demanda civil presentada por Magdalena Garcés en representación de Eliana Galindo Ramírez y Rodemil Galindo Ramírez condenando al Fisco de Chile, a pagar una indemnización por daño moral de \$ 40.000.000 (cuarenta millones) en favor de cada uno de los demandantes.

Se resolvió que las indemnizaciones se reajustarán conforme al alza del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha que la sentencia quede firme o ejecutoriada más intereses corrientes desde que se genere la mora.

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de 7 de febrero de 2019, complementada el 8 de febrero del mismo año,



de fojas 2059 y 2064, respectivamente, confirmó la sentencia en alzada con declaración que se reduce la indemnización ordenada pagar a los actores civiles a la suma de \$20.000.000 (veinte millones) para cada uno de ellos.

Se aprobó en lo demás consultado el referido fallo y los sobreseimientos definitivos por muerte de Eugenio Fieldhouse y Basclay Zapata de fojas 1965 y 1249.

Contra ese fallo doña Magdalena Garcés Fuentes en representación de los querellantes y actores civiles formalizó recurso de casación en la forma como consta a fojas 2068, en tanto que la Defensa de Pedro Espinoza Bravo dedujo recurso de casación en el fondo, a fojas 2073.

Por decreto de fojas 2086, de 2 de abril de 2019, se ordenó traer los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, el recurso de casación en la forma, deducido por la querellante, se sustenta en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, a saber, “En no haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley”. Lo anterior, en nexa con el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de “las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia”, al disminuir las sumas de dinero ordenadas pagar a título de indemnización de perjuicios, por el daño moral causado a los demandantes, sin efectuar las debidas consideraciones de hecho que sirven de apoyo a su decisión judicial.

Agrega que el monto ordenado pagar por el Fisco no se condice con los daños sufridos por los actores y no se explica por los jueces del fondo cómo se



llegó a determinar la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos), para cada una de los demandantes, en su calidad de hermanos de la víctima María Galindo Ramírez, aludiendo en forma genérica a que *“la prueba producida por los demandantes atiende fundamentalmente a los padecimientos de los padres de la víctima, no se alcanza a demostrar con ella la verificación de un dolor especialmente intenso en los demandantes”*; sin embargo, -continúa la recurrente- no dice a qué prueba se refiere, no la analiza ni siquiera la menciona, ni la sentencia de primera ni la de segunda instancia.

En consideración a tal vicio denunciado, se fijó el monto indemnizatorio ya dicho, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, sufriendo los actores un perjuicio reparable sólo con la invalidación de la sentencia, y la dictación de una de reemplazo que, acogiendo la demanda impetrada, eleve el monto indemnizatorio a \$300.000.000, reparando íntegramente lo que han padecido con la desaparición de la víctima doña María Galindo Ramírez, más los reajustes e intereses calculados en la forma indicada en la sentencia de primera instancia, o se dicte otra que crea conforme a la ley y al mérito del proceso, todo con costas.

**SEGUNDO:** Que, a continuación, la defensa del sentenciado Pedro Espinoza Bravo, dedujo recurso de casación en el fondo, que sustenta en la configuración del numeral séptimo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por la inobservancia del artículo 488 del mismo cuerpo legal, en relación con los artículos 15 y 141 del Código Penal. Desarrollando sus agravios, postula que de acuerdo al mérito de autos, no existen elementos de convicción que puedan llevar a establecer sin lugar a dudas que el acusado Pedro Espinoza



Bravo tuvo algún grado de participación en los hechos. Así, indica que apreciada la prueba conforme al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, la sentencia debió ser revocada y el mencionado acusado, absuelto.

Termina solicitando acoger el recurso y en sentencia de reemplazo exonerar a su parte de la acusación formulada en su contra.

**TERCERO:** Que previo al estudio de los recursos, es conveniente recordar los hechos que el tribunal ha tenido por demostrados y que son los que a continuación se reproducen:

1° Que la Dirección de Inteligencia Nacional, conocida como DINA, nace como entidad represiva del Estado en el mes de junio de 1974 teniendo siempre a su mando a su Director Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido, y para cumplir sus fines ilícitos de detenciones e interrogatorios en centros de reclusión clandestinos, contaba con numerosos agentes de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuya conducta violenta se acompañó con la ejecución y desaparición de sus víctimas, solo por el hecho de tener una ideología distinta considerada atentatoria del orden que se quería imponer;

2° Que los agentes encargados de efectuar las operaciones del organismo, se encontraban vinculados a la Dirección de Operaciones de 1a Institución, a cargo de Pedro Espinoza Bravo, cuya misión era la coordinación de todas las unidades de inteligencia, labores operativas y represivas, y de esta manera para los interrogatorios y encierros clandestinos este organismo represor contaba con los cuarteles de Londres 38, Villa Grimaldi,



José Domingo Carías y Venda Sexy, dependientes del ya mencionado departamento.

3° Villa Grimaldi, a la fecha de los hechos investigados, estaba a cargo del Oficial de Ejército Carlos José López Tapia, quien también (Informe policial de fojas 101 y siguientes) se desempeñaba como Jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana a cargo de las labores operativas en la región, y en dicho recinto, calificado como clandestino por las autoridades (Oficio de fojas 297) dado que no dependía del Ministerio del Interior, operaban dos Agrupaciones, Caupolicán y Purén, cada una de ellas con su plana mayor.

4° Que la llamada Brigada Caupolicán, a cargo del Oficial de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko a la fecha de los hechos, actuaba en terreno con varios grupos operativos, que procedían bajo la nomenclatura de Águila, Halcón I y II, Tucán y Vampiro, y sus integrantes estaban encargados de detener, interrogar y finalmente, decidir el destino de los detenidos;

5° Que en este contexto, María Galindo Ramírez, militante del Partido Socialista, es detenida en la vía pública, presumiblemente en la comuna de Estación Central, el día 18 de julio de 1976, por agentes que han sido identificados en esta investigación necesariamente como integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, y dentro de éste, como aquellos que de acuerdo a su organización de trabajo tenían como misión la represión del MIR, quienes la trasladan al cuartel de reclusión clandestino Terranova también conocido como Villa Grimaldi, lugar donde la víctima fue vista por otros detenidos, algunos de ellos mantuvieron contacto visual y otros lograron comunicarse con ella, y también por un agente de la guardia de detenidos del



cuartel, quien entabló en más de una oportunidad una conversación con ella, logró identificarla y reafirma su presencia en el lugar, al punto que es quien proporciona la información acerca de los malos tratos, torturas y vejaciones cometidas en su contra, y señala que desde ese lugar se le pierde la pista sin que tenga más noticias sobre de su paradero ni se haya determinado su fallecimiento, identificando entre los agentes que la interrogaron y sacaron del cuartel a Basclay Zapata Reyes, miembro de 1a Agrupación Halcón a la fecha de los hechos, quien ha señalado que todas las órdenes sobre sus actuaciones provenía del oficial a cargo del MIR (investigación y represión), esto es Miguel Krassnoff Martchenko.

**CUARTO:** Que los hechos expuestos precedentemente fueron calificados en la sentencia de primera instancia, que la de segunda hizo suya, como constitutivos del delito de secuestro calificado, de María Galindo Ramírez, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 1° y 3° del Código Penal, en relación con el inciso 4° del mismo artículo, ocurrido a contar del día 22 de julio de 1976.

**QUINTO:** Que, además, en su considerando vigésimo segundo, el tribunal de primera instancia calificó los hechos como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, argumentando que “se trata de un tema significativo, que se encuentra vinculado a la dignidad de los seres humanos y por ende, requiere de una normativa que descarte a todo acto criminal que se ejecute bajo el manto de ejercer funciones públicas, y constituye en imperativo para toda autoridad perseguir las responsabilidades de aquellos que incurrieron en actos crueles e inhumanos, lo cual se concreta a través de las normas del ius cogens, los usos y costumbres generalizados y obligatorias en el derecho



internacional humanitario consuetudinario y el derecho convencional internacional, reflejado en nuestra Constitución Política de la Republica, en su artículo 5° con el deber del Estado de respetar y promover derechos, garantizados por la Constitución y tratados internacionales”.

A lo anterior los jueces del fondo en su raciocinio tercero añadieron que “tanto la preceptiva internacional como nacional relativa a esta materia, en especial el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Ley N° 20.357 del año 2009, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, respectivamente, así como la jurisprudencia de los Tribunales y organismos internacionales, hoy es conteste en considerar como elementos típicos del crimen contra la humanidad -en lo que aquí interesa-, el que las acciones que los constituyen sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y el conocimiento de dicho ataque por el agente”

#### **I.-RESPECTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA**

**SEXTO:** Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado por el recurso de nulidad formal, resulta necesario tener presente los siguientes supuestos fácticos:

1.- En estos antecedentes los actores Eliana y Rodemil, ambos Galindo Ramírez, interpusieron demanda de indemnización de perjuicios por los daños morales que les fueran causados por el secuestro calificado del que fue víctima su hermana María Galindo Ramírez, ocurrido a contar del día 22 de julio de 1976. Solicitaron una indemnización de perjuicios ascendente a \$300.000.000 (trescientos millones de pesos); más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y el pago efectivo, todo con costas de la causa.



Los actores fundan su demanda en su calidad de hermanos de doña María Galindo Ramírez, quien habría sido víctima de actos constitutivos de crímenes de Derecho Internacional, ejecutados durante la dictadura cívico-militar ocurrida en el país, reconocida por la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, exponiendo que la víctima, militante del MIR, el día 22 de julio de 1976, fue detenida por agentes de la DINA.

**2.-** La demandada contestó la demanda, solicitando su total rechazo impetrando las excepciones de preterición legal de los demandantes, pago y prescripción, y en subsidio de lo anterior efectuó alegaciones relativas a la naturaleza y la suma pretendida, argumentando que el monto de la reparación depende del daño y no de la gravedad del hecho, lo que debe ser acreditado en juicio conforme a la ley. Finalmente alega la improcedencia de los intereses y reajustes.

**SÉPTIMO:** Que el fallo de primer grado dio por establecido el hecho fundante de la acción impetrada en autos, esto es, que María Galindo Ramírez, tiene la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos, conforme lo establecieron la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago y el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Tal como se refirió precedentemente, en ese fallo se acogió parcialmente la demanda impetrada por Eliana y Rodemil, ambos Galindo Ramírez, ordenando al Fisco de Chile indemnizar con un total de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos), a cada uno de los actores, sentencia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con declaración que se reduce el monto ordenado





pagar a cada uno de los demandantes a la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos).

**OCTAVO:** Que en relación al vicio denunciado se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran en lo que atañe al presente recurso en su numeral 4°, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

**NOVENO:** Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.



Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida prosigue el Auto Acordado deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe, enseguida que, establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

**DÉCIMO:** Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del por qué de una decisión judicial. (SCS Rol N° 4835 2017 de ocho de enero de 2017).



**UNDÉCIMO:** Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC 9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior, constituye una vulneración de la Convención así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

**DUODÉCIMO:** Que en la especie resulta evidente que la sentencia impugnada adolece de la falencia denunciada, toda vez que de su tenor aparece, en los términos acotados en la reflexión anterior, una insuficiente exposición de los raciocinios que le sirven de soporte, en aquella parte en que reduce la indemnización del daño moral otorgada por la sentencia de primera instancia, de cuarenta a veinte millones de pesos para cada uno de los señores Eliana y Rodemil Galindo Ramírez, por lo que no se ha acatado el mandato del legislador.



Efectivamente, la sentencia recurrida, en el único considerando en el que analiza la reducción del monto indemnizatorio, expresa: *"Octavo: Que considerando que la prueba producida por los demandantes atiende fundamentalmente a los padecimientos de los padres de la víctima, no se alcanza a demostrar con ella la verificación de un dolor especialmente intenso en los demandantes, producto de la desaparición de su hermana, por lo que deviene en desproporcionada la indemnización otorgada, como sostiene el representante del Fisco de Chile en su apelación. De otra parte, los antecedentes obtenidos como medida para mejor resolver, tampoco subsanan la falencia anotada, porque sólo se refieren al dolor que, en general, pueden experimentar personas sometidas a la situación vivida por los actores, pero no se refieren al caso particular de los demandantes de autos"*. Luego de ello, el fallo confirma la sentencia apelada con declaración que se reduce el monto de la indemnización a \$20.000.000 (veinte millones de pesos), sin analizar el detalle de los antecedentes que los llevaron a disminuir la suma ordenada pagar al Fisco de Chile, lo que atendido la naturaleza de la impugnación formulada constituye la omisión de los razonamientos del juicio denunciados por el presente arbitrio. Sucede que, en situaciones como la investigada y sancionada en los presentes autos, reviste especial trascendencia tanto la acción para perseguir la responsabilidad penal, como aquella para obtener la indemnización del daño producido por el delito, resultando su análisis y constatación de máxima relevancia al momento de administrar justicia, por tratarse de materias en que, más allá de la justicia material del caso en concreto, se encuentra comprometido el interés público, al permitir en definitiva, avanzar en el término del conflicto.



La necesidad de un análisis en tal sentido emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida y de lo expuesto por los litigantes, dado que para una adecuada resolución del asunto era imperativo analizar cuál fue la prueba del daño moral sufrido por los padres, en cuya virtud se estimó necesario rebajar el monto indemnizatorio fijado por el tribunal de primera instancia en favor de los actores. Tampoco existe un análisis de los antecedentes obtenidos como medida para mejor resolver, los que según el fallo impugnado, sólo se referirían al dolor que en general, pueden experimentar personas sometidas a la situación vivida por los actores, cuando la controversia planteada versaba justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile con su actuar causaron a los recurrentes.

**DÉCIMO TERCERO:** Que como puede advertirse, el fallo incurre en la motivación alegada y consagrada en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal porque no acata la exigencia consistente en haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley, en relación con el literal N° 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que impone el deber de los jueces de anotar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por lo que en las condiciones anotadas el recurso de casación en la forma promovido en contra del fallo impugnado por la demandante, será acogido.

## **II.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:**

**DÉCIMO CUARTO:** Que en cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por la defensa de Pedro Espinoza Bravo, fundado en la causal 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción del artículo 488 del mismo cuerpo legal, en relación con los artículos 15 y 141 del Código Penal, el



recurrente esgrime que la sentencia impugnada condenó a su representado por simples presunciones que no han sido construidas con estricto apego a las normas procesales en materia probatoria. Expresa que la fecha en que habrían ocurrido los hechos, esto es, el 22 de julio de 1976, Espinoza Bravo se encontraba cumpliendo funciones administrativas en su cargo de Director de Operaciones, el que afirma desempeñó desde marzo de 1976 hasta noviembre de 1977, labores que se encuentran acreditadas con el documento denominado “Plan de Acción” que fue acompañado por la defensa a los autos. Que, en este entendido, las funciones como Director de Operaciones -continúa el recurrente- no eran coordinar a las unidades operativas como erróneamente afirma la sentencia que se impugna, puesto que ellas le rendían cuenta de su accionar directamente al Director de DINA, esto es, Manuel Contreras Sepúlveda. Que, así, resulta evidente que para esa época (1976) su representado ya no estaba a cargo del Cuartel Terranova y no formaba parte de ningún grupo operativo.

Concluye que la sentencia toma como elemento base para configurar una presunción judicial una supuesta confesión judicial que ha sido desvirtuada, además de una serie de presuntos elementos probatorios que no son hechos ciertos, reales y múltiples, de manera que no son aptos para producir una presunción judicial completa, por no cumplir los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, según se explicitó, el recurso de casación antes referido cuestiona la participación del condenado Pedro Espinoza Bravo en los hechos establecidos por la sentencia en estudio, por lo que cabe abocarse a revisar si las normas reguladoras que esgrime, han sido efectivamente vulneradas,



único modo en que sus pretensiones pueden prosperar, pues resulta necesario la demostración de la efectiva infracción de las leyes reguladoras de la prueba, en el asentamiento de los presupuestos fácticos de la decisión atacada.

En primer lugar, en el arbitrio se defiende la infracción del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece diversos extremos para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho, en este caso, de la participación del acusado Espinoza Bravo, en el delito objeto de la sentencia.

De dichos extremos, esta Corte ha aclarado que sólo constituyen normas reguladoras de la prueba, que pueden ser revisadas, en sede de casación, la contenida en el ordinal 1°, esto es, que las presunciones judiciales se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales y, del ordinal 2°, la exigencia de multiplicidad de ellas. Los demás extremos, esto es, que las presunciones sean graves; precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el de que se trata, no pueden considerarse reglas reguladoras de la prueba, ya que queda entregado a los jueces de la instancia afirmar o negar su cumplimiento como resultado de un ejercicio de ponderación y valoración del conjunto de las presunciones judiciales, cuestión que les es privativa a los sentenciadores del grado y que no puede ser controlado por esta Corte.

Así, ha dicho antes este Tribunal al señalar: “las exigencias contenidas en



los ordinales N° 2 a 5 del artículo 488, para constituir prueba completa, como las relativas a su gravedad, precisión y concordancia, tampoco puede conseguirse por esta vía [recurso de casación], pues demanda juicios y valoraciones que escapan a un control acotado a errores de derecho propio de la casación de fondo” (SCS Rol N° 32.259-15 de 23 de diciembre de 2015 y Rol N° 8758-15 de 22 de septiembre de 2015). En el mismo sentido y, complementando lo anterior, se ha declarado que el artículo 488, en estudio, es norma reguladora de la prueba, “sólo en cuanto establece una limitación a las facultades de los jueces del fondo para dar por probados los hechos litigiosos a través del uso de presunciones judiciales. Por ello, un correcto y competente examen respecto de esta infracción importa respetar la prohibición que tiene esta Corte de adentrarse en un nuevo análisis de la ponderación realizada por los jueces del grado, pues dicho ámbito escapa al control de esta magistratura, ya que de realizarlo se volvería a examinar y valorar los antecedentes probatorios que ya fueron apreciados, además de revisar las conclusiones a que aquellos arribaron, lo que está vedado, pues desnaturaliza el arbitrio en estudio, el que debe fundarse exclusivamente en asuntos de derecho” (SCS Rol N°33.997-16 de 13 de octubre de 2016).

**DÉCIMO SEXTO:** Que sentado lo anterior, primero conviene precisar, que el libelo no indica los numerales que considera han sido conculcados y de la lectura del recurso tampoco se demuestra su imputación, pues únicamente cita la disposición para plantear una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción reunidos y relacionados en la sentencia conforme a los cuales se estimó acreditada la intervención del acusado Espinoza





Bravo en los hechos, discordando de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva.

Así, en lo que respecta al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, tal como reiteradamente se ha mencionado, es preciso señalar que la invocación genérica del mencionado precepto que se ha efectuado por el impugnante, atenta contra la calidad de derecho estricto del recurso, lo que impide a este tribunal concluir, con toda precisión, en qué consistió el error de derecho y de qué modo influyó en lo decisorio.

Sin perjuicio de lo expresado, y teniendo en consideración que la presunción judicial es: “la consecuencia que, de hechos conocidos o manifestados en el proceso, deduce el tribunal ya en cuanto a la perpetración de un delito, ya en cuanto a las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona, y entonces sólo puede llegar a configurar prueba completa de un determinado suceso cuando se basa en eventos reales y probados y no en otras presunciones, legales o judiciales, de acuerdo con el artículo 488 N° 1, del reseñado ordenamiento adjetivo” (Graciela Latorre Ceballos: “Las presunciones en el proceso penal”, memoria de prueba, Editorial Universitaria S.A., 1964, pág. 178), los hechos asentados en el motivo tercero de la sentencia de primer grado, hechos suyos por el fallo en alzada, que estableció la participación de Espinoza Bravo a título de autor, emanan de antecedentes que constan en la causa y que se encuentran reseñados en el considerando décimo de manera que las exigencias que la norma citada como conculcada impone han sido satisfechas, toda vez que las referidas conclusiones emanan de otros medios de prueba y no de otras inferencias.



En efecto, en el aludido considerando la sentencia establece que obran en contra del acusado Espinoza Bravo, los antecedentes enunciados en el fundamento segundo y en particular las conclusiones expuestas en los informes policiales de fojas 101 y siguientes, fojas 111 y el de fojas 115 y siguientes, ambos de la Policía de Investigaciones de Chile, en que se describe a la Dirección de Operaciones de la DINA, a cargo del procesado Bravo Espinoza, dependiendo directamente del Director Nacional y cuya función era la coordinación de todas las unidades de inteligencia, operativas, represivas y de contrainsurgencia, dependiendo de ella, además de las Brigadas y equipos operativos, también los cuarteles, entre ellos, Terranova o Villa Grimaldi, tal como lo ha manifestado en copias adjuntas a fojas 803, 816 y 820 correspondientes al proceso Rol N° 2182- 1998 Operación Colombo, la testigo Luz Arce Sandoval, quien ha expresado, desde el conocimiento que posee de la estructura por haber cooperado con la DINA (primero en calidad de detenida y luego de funcionaria) que allí el procesado Espinoza Bravo "*...tenía como misión planificar e implementar la central de operaciones del Cuartel General de la DINA y asumir el mando y coordinación de las actividades de la BIM y las Brigadas Regionales*", desacreditándose de esta manera los dichos de Espinoza Bravo en cuanto a que sus funciones tenían naturaleza administrativa y logística solamente. Lo anterior además ha sido corroborado por los dichos del procesado Carlos José Leonardo López Tapia a fojas 763, quien en su cargo de comandante del Cuartel Terranova, donde existían las Brigadas Caupolicán a cargo de Miguel Krassnoff que controlaba todo aquello que dijera relación con el MIR, y Mulchén, a cargo de Germán Barriga que



veía al Partido Socialista, ha señalado que ambas eran autónomas y a la fecha investigada " *recibían órdenes directas de la Dirección de Operaciones, a cargo de Pedro Espinoza y sobre él, de Manuel Contreras Sepúlveda como Director de la DINA..*"

En virtud de lo anterior, el sentenciador concluyó que "no resulta verosímil al alero de los antecedentes entregados, tener por cierta la naturaleza administrativa y logística de las funciones de Espinoza Bravo en la Dirección de Operaciones de la DINA, máxime aun cuando al revisar su paso por la institución se advierte primero como Comandante de Villa Grimaldi y luego como Jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, un estrecho vínculo con tareas operativas y de represión, baste recordar para ello el capítulo que él mismo describe a fojas 412, al señalar que en Villa Grimaldi siendo la mayoría de detenidos del MIR, "*...habrán hecho con ellos un trabajo, reuniéndose en las tardes, conversando, para que hicieron un llamado público a deponer su accionar...*" de modo que no puede alegar desconocimiento del sistema de ingreso de detenidos, su estadía en los cuarteles a su cargo, el estado físico y mental que ellos tenían, las condiciones en que eran interrogados y permanecían en el interior de Villa Grimaldi, y su egreso, puesto que aunque los hechos investigados se remontan al año 1976 y su jefatura en Terranova lo fue hasta el año 1974, es claro pensar que dependiendo el centro de detención, de la Dirección de Operaciones a su cargo, mantuviera la injerencia y el conocimiento de su funcionamiento por la verticalidad del mando. Refrenda además lo anterior a fojas 361, la testigo Marcia Merino Vega, quien respecto de las funciones de Espinoza Bravo,



reafirma que era Director de Operaciones de la DINA con oficina en las afueras del cuartel general y que *"...todas las Brigadas dedicadas a la represión de la DINA dependían del Director de Operaciones..."*. Enseguida agregó que "lo anterior permite adquirir la plena convicción que le ha correspondido en este caso a Pedro Espinoza Bravo, una participación de autor en delito de secuestro de María Galindo Ramírez, ya que en su calidad de Director de Operaciones de la DINA, es quien ha propuesto las directrices a los grupos operativos, entregando la coordinación, medios y estructura a éstos, facilitando además las instalaciones para el encierro de la víctima y más aún, lo comunica a su superior, pretendiendo luego desentenderse y alegar ignorancia sobre los sucesos ocurridos en su interior, inverosímil atendida la naturaleza de la institución y la formación militar de sus agentes", todo lo cual fue inferido mediante el ejercicio lógico-valorativo a que es llamado el tribunal, que constituyen presunciones judiciales de la participación del sentenciado Espinoza Bravo en el delito legalmente establecido, las que además, son múltiples.

Así, el raciocinio que conduce al juez a considerar probados o no tales hechos con esos medios, como se dijo, escapa naturalmente del control del tribunal de casación. En tal sentido, Manuel Egidio Ballesteros expresa: "nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones" ("Proyecto de Código de Procedimiento Penal para la



República de Chile”, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, año mil ochocientos noventa y siete, nota al artículo 466 [actual 456], páginas 254 y 255).

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, de esta manera, entonces, al no haberse demostrado la aplicación errónea de la ley atingente a la causal de infracción a las leyes reguladoras de la prueba, los hechos demostrados en la sentencia, consignados en el fundamento tercero y décimo del fallo de primer grado, hechos suyos por el fallo en alzada, resultan inamovibles, de los que surge con claridad la intervención de Espinoza Bravo como autor del delito de secuestro calificado, calificación que no merece reproche a este Tribunal, de manera que la causal sustantiva planteada habrá de ser desestimada.

Es así como el tribunal de alzada ha dado recta aplicación al artículo 15 del Código Penal, sancionando al enjuiciado por su intervención en calidad de autor en los hechos establecidos al realizar los actos que prevé la hipótesis del citado artículo 141 inciso tercero del mismo cuerpo legal.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 170, 766 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 15 y 141 del Código Penal, 488, 535, 541 N° 9 y 546, N° 7, del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I.- Que **se acoge** el recurso de casación en la forma deducido por doña Magdalena Garcés Fuentes en representación de los demandantes, doña Eliana Galindo Ramírez y don Rodemil Galindo Ramírez, en contra de la sentencia de siete de febrero de dos mil diecinueve, complementada el día ocho de febrero del mismo año, las que en consecuencia se anulan solo en su sección civil y se las reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.



II.- **Se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido por la Defensa del sentenciado Pedro Espinoza Bravo a fojas 2073, en contra de la sentencia de siete de febrero de 2019 y su complemento de ocho de febrero de igual año, escritas a fojas 2059 y 2064, respectivamente, las que, en consecuencia en su sección penal no son nulas.

La Corte de Apelaciones de Santiago, dictará la resolución que en derecho corresponda respecto del sobreseimiento de Carlos López de fojas 2024.

**Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Biel y de la Abogada Integrante Sra. Coppo** quienes también fueron del parecer de rechazar el recurso de casación en la forma impetrado por la parte querellante teniendo en consideración para ello las siguientes argumentaciones:

1° Que el recurso de casación en la forma deducido ha sido fundado en la causal prevista en el N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, la que se relaciona, según expresa el libelo, con el requisito establecido en el N° 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Se afirma que la sentencia no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley, ya que no contiene las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia como exige artículo 170.

Pues bien, el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal dispone que “la casación en materia penal se rige, salvo lo dispuesto en el Título I del Libro III de este Código, por las prescripciones de los párrafos 1° y 4° del Título XIX, Libro III del Código de Procedimiento Civil, en lo que no sea contrario a lo establecido en el presente título.” Por su lado, el inciso final del artículo 541 del mismo código expresa que cuando el recurso de casación en la forma se dirija contra la decisión



civil, podrá fundarse en las causales anteriores, en cuanto le sean aplicables, y además en alguna de las causales 4a., 6a. y 7a. del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. En el presente caso, la causal invocada es una de las contempladas en el mismo artículo 541.

Lo anterior significa que para que el recurso de casación en la forma pueda prosperar, debe cumplir, entre otros, con los requisitos preceptuados en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, entre los que se encuentra la necesidad de mencionar expresamente el vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la causal que se invoca.

Así las cosas, el recurso que se analiza no se ha enderezado de manera correcta, toda vez que la ley que concede el recurso por la causal en que se funda ha sido incorrectamente invocada y esta circunstancia resulta suficiente para rechazar el arbitrio de invalidación. En efecto, conforme al artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, es causal de nulidad formal que el fallo no haya sido extendido en la forma dispuesta por la ley y tal forma no es la señalada en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil -como reseña el recurso-, sino que lo ordenado en el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, precepto que determina el contenido de la sentencia definitiva de primera instancia y la segunda que modifique o revoque la de otro tribunal y que es la norma que debió ser expresamente mencionada en el recurso.

**2º** Que sin perjuicio de lo antes dicho, y analizando el reproche que se hace a la sentencia recurrida en cuanto a no contener las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados y las razones legales o doctrinales que sirven para establecer la



responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas, es preciso tener presente que tal exigencia dice relación con el imperativo de fundamentación que recae sobre las resoluciones judiciales. Éste se satisface con los razonamientos lógicos y armónicos que deben contener para justificar por qué establece los hechos que consigna y luego aplica el derecho correspondiente. Tal requerimiento proviene de la necesidad que las sentencias se ajusten a la legalidad y a proporcionar a los litigantes los antecedentes que les permitan conocer los motivos que determinaron la decisión para la interposición de los recursos por medio de los cuales fuere posible la modificación o invalidación de los mismos, todo ello, en el marco de la existencia de un justo y racional procedimiento que debe mediar para asentar las decisiones de los órganos que ejercen jurisdicción.

3° Que la sentencia de primer grado al determinar el monto a pagar por concepto de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por los demandantes, indicó en su considerando Trigésimo Octavo que “con los testimonios prestados en la audiencia de fojas 1531, 1535, y 1544, donde concurrieron los testigos Sylvia María Castillo Araya, Alberto Aníbal Rodríguez Gallardo, y Hugo Vladimir Monsalvez Obreque, y los documentos adjuntos como medida para mejor resolver desde fojas 1632 y siguientes relativos a las secuelas producidas en los familiares de personas víctimas de derechos humanos, acreditándose de esa forma en el juicio con arreglo a la ley, la extensión del daño. De lo anterior, resulta evidente y posible que el daño moral demandado por la hermana y hermano de la víctima deba ser indemnizado, toda vez que en el recuerdo de los demandantes se ha





mantenido vigente como consecuencia de la desaparición de María Galindo Ramírez.”

4° Que por su parte la sentencia impugnada disminuyó la suma ordenada pagar al Fisco de Chile en favor de los demandantes civiles considerando que “el daño moral es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Este daño sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa, sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva”. Agregan los sentenciadores que “atendida esta particularidad, no pueden aplicarse para precisar su existencia las mismas reglas que las utilizadas para la determinación de los daños materiales, que están constituidos por hechos tangibles y concretos, que indudablemente deben ser demostrados, tanto en lo que atañe a su especie como a su monto, por lo que han de tomarse en cuenta todos los antecedentes reunidos, debiendo hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.”

A continuación, considerando la prueba producida por los demandantes, señalaron que “aquella atiende fundamentalmente a los padecimientos de los padres de la víctima, no se alcanza a demostrar con ella la verificación de un dolor especialmente intenso en los demandantes, producto de la desaparición de su hermana, por lo que deviene en desproporcionada la indemnización otorgada, como sostiene el representante del Fisco de Chile en su apelación. De otra parte,



los antecedentes obtenidos como medida para mejor resolver, tampoco subsanan la falencia anotada, porque solo se refieren al dolor que, en general, pueden experimentar personas sometidas a la situación vivida por los actores, pero no se refiere al caso particular de los demandantes de autos.”

5° Que como se dijo, la causal en análisis se configura cuando en la sentencia se omiten las consideraciones de hecho en cuya virtud se dan por probados o no los hechos atribuidos a los procesados y las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados y, respecto de ello, en concepto de estos disidentes, la resolución objeto de reproche cumple con la exigencia que el recurrente denuncia como omitida.

En efecto, el fallo sí contiene las consideraciones que le sirven de fundamento, tanto en lo relativo al análisis de la prueba rendida como las reflexiones en virtud de las cuales se reduce prudencialmente el monto que se determina como indemnización por el daño moral sufrido por los actores. Como se desprende de los párrafos previamente citados, la sentencia define primeramente el daño moral, relevándose -correctamente-, la circunstancia que debe hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el tribunal de la instancia. Luego, se indican las razones por las que se decide rebajar el monto de las indemnizaciones concedidas por estimárselas desproporcionadas al no haberse acreditado un “dolor especialmente intenso en los demandantes” y ello en alusión directa a la prueba rendida en autos. Así, se explica primeramente, que se estimó que la prueba producida por los demandantes se refirió fundamentalmente a los padecimientos de los padres de la víctima y no a ellos en su calidad de



hermanos y, segundo, que la obtenida a través de la medida para mejor resolver, no se refiere al caso particular de los demandantes de autos sino que al padecimiento que la generalidad de las personas puede experimentar en situaciones como la vivida por los actores.

6° Que, en consecuencia, los jueces del fondo no han incurrido en el vicio que se les imputa, toda vez que el fallo impugnado se encuentra dotado de motivación suficiente en lo relativo a la justificación de la rebaja de la cuantía de las indemnizaciones a favor de los demandantes, pues contiene consideraciones que sirven de fundamento a tal decisión, razón por la que es forzoso concluir que no se configura en la especie el motivo de invalidación alegado y se debe rechazar el recurso de casación en estudio.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Coppo y de la disidencia, sus autores.

Regístrese.

Rol N° 7843-19

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Rodrigo Biel M., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorali G., y Carolina Coppo D. No firma el Ministro Suplente Sr. Biel y la Abogada Integrante Sra. Tavorali, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.



HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO

Fecha: 23/08/2021 15:43:42

LEOPOLDO ANDRES LLANOS  
SAGRISTA

MINISTRO

Fecha: 23/08/2021 15:43:42

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ  
ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 23/08/2021 15:47:14



QZRMVXMWBW

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 23/08/2021 16:28:24

En Santiago, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 23/08/2021 16:28:24



## **SENTENCIA DE REEMPLAZO**

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 554 inciso 3° del Código de Procedimiento Penal, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo, con arreglo a la ley.

### **VISTOS:**

Se reproduce íntegramente la sentencia en alzada, con excepción de su considerando octavo, el que se elimina.

### **Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que, según jurisprudencia reiterada de esta Corte, el daño moral es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, por consiguiente, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva (SCS N° 3975-16 de 29 de marzo de 2016; N°30958-14 de uno de diciembre de 2015).

**SEGUNDO:** Que, según previenen los artículos 2314 y 2329 del Código Civil y 24 del Código Penal, toda persona que ha cometido un hecho ilícito es obligada a indemnizar los daños y perjuicios causados, incluyendo el moral, que tiene su fundamento precisamente en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho delictivo le provoca a la víctima en su sensibilidad física o psíquica, en sus sentimientos o afectos.



**TERCERO:** Que, atendida esta singularidad, no es dable aplicar para precisar su existencia similares cánones que los utilizados para la determinación de los daños materiales, que están constituidos por hechos tangibles y concretos, que indudablemente deben ser demostrados, tanto en lo que apunta a su especie como a su monto.

**CUARTO:** Que el menoscabo moral, siendo –como ya se dijo- de índole netamente subjetiva, queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces de la instancia, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado por quienes lo demandan como víctimas del delito.

**QUINTO:** Que, en este entendido, acreditados como han sido la comisión de los delitos investigados y la participación culpable y penada por la ley de los agentes perpetradores, surge también la efectividad del padecimiento del daño moral de los actores, acreditándose en estos autos que doña Eliana Galindo Ramírez, hizo una búsqueda exhaustiva, aunque infructuosa, de su hermana desaparecida. En efecto, consta en el proceso que doña Eliana Galindo Ramírez interpuso a favor de su hermana un recurso de amparo, que rola a fojas 206; una denuncia, con fecha 22 de enero de 1977, que rola a fojas 167 y siguientes, con la que se dio inicio al proceso Rol N° 4201-8, del 10° Juzgado del Crimen de Santiago; una querella por el delito de secuestro y una presentación ante el Ministro del Interior de la época, con fecha 24 de enero de 1977, recibiendo las respuestas negativas tanto del citado Ministro, como de la Central de



Documentación de la Presidencia, de la Secretaría General de Gobierno y del Ministerio del Interior, que corren agregadas a fojas 195, 196, 201, 227, 229, 231 y 234. En su querella, la actora efectuó un relato de los hechos, señalando que su hermana, María Galindo Ramírez había sido detenida ilegalmente por agentes de seguridad del gobierno actuando al margen de la normativa nacional e internacional, que agentes de la DINA habían posteriormente registrado su domicilio, y que el testigo Pedro Rolando Jara Alegría le confirmó la presencia de su hermana en Villa Grimaldi, centro de detención donde coincidió con ella en agosto de 1976, oportunidad en que la vio en muy mal estado, por haber sido torturada y haber sufrido toda clase de abusos.

La actora, doña Eliana Galindo Ramírez, se querelló luego en contra de agentes de la DINA, por los delitos de secuestro agravado, lesiones graves, incomunicación prolongada, tormentos y rigor innecesarios y detención arbitraria sufrida por su hermana María Galindo, querella que rola a fojas 301.

Finalmente, a fojas 344, corre una última querella deducida por doña Eliana Galindo Ramírez por los delitos de crímenes de guerra, secuestro agravado, lesiones, asociación ilícita, perpetrados en contra de su hermana.

En su declaración de fojas 401, doña Eliana Galindo Ramírez señaló que ella vivía con su conviviente, Roberto Rojas Álvarez, sus hijos y con su hermana María Galindo Ramírez, y que luego de la desaparición de la víctima, realizó diversas gestiones para ubicarla, apersonándose en la Vicaría de la Solidaridad, presentando recursos y querellas, sin obtener resultados que le permitieran obtener información acerca del paradero de su hermana, y que sólo años después, pudo enterarse, por una información que publicó Manuel Contreras





sobre desaparecidos, que su hermana figuraba como detenida el 18 de julio de 1976, y que su destino había sido el mar. Se encuentra agregada también la declaración que doña Eliana Garrido Ramírez prestó ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en que se señala, que en los días previos a la desaparición de su hermana, el grupo familiar se había trasladado al sur, retornando a Santiago únicamente su hermana María y su conviviente Roberto Rojas, y bajo el título *descripción de los daños sufridos por el grupo familiar*, se hace mención al posterior asesinato de su conviviente, Roberto Rojas, en el año 1980, a su condición de integrante y colaborador de la CNI, y a la circunstancia que éste pudiera haber sido quien delató a su hermana a los organismos de seguridad, entorno que significó mucho sufrimiento para toda su familia, sus padres y sus hijas.

De lo anterior resulta, en criterio de este Tribunal que el daño moral sufrido por los actores, cuya determinación concierne principalmente a la prudencia del tribunal - porque materialmente es difícil, si no imposible, medir con exactitud la intensidad del sufrimiento provocado por la comisión del delito establecido-, se encuentra en estos autos suficientemente acreditado. En efecto, las incesantes, aunque infructuosas gestiones de búsqueda realizadas por la hermana de la víctima, constituyen indicios suficientes de la angustia y dolor provocados por la incertidumbre y desconocimiento del paradero de su hermana, ilegalmente secuestrada por agentes estatales y desaparecida.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en las normas citadas y lo prescrito en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil se declara que se confirma la sentencia apelada de once de septiembre de dos mil diecisiete, dictada



por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Mario Carroza Espinosa, en los autos Rol 335-2012, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago.

**Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Biel y de la Abogada Integrante Sra. Coppo**, quienes, atendida la disidencia manifestada en el fallo de casación, estuvieron por mantener lo resuelto por el tribunal de segunda instancia.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Rol N° 7843-2019

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Rodrigo Biel M., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorali G., y Carolina Coppo D. No firma el Ministro Suplente Sr. Biel y la Abogada Integrante Sra. Tavorali, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 23/08/2021 15:43:43

LEOPOLDO ANDRES LLANOS  
SAGRISTA  
MINISTRO  
Fecha: 23/08/2021 15:43:43

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 23/08/2021 15:47:15



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 23/08/2021 16:28:25

En Santiago, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 23/08/2021 16:28:25

